

La lección francesa

DESDE hace más de dos meses la sociedad francesa vive convulsionada: sería necesario remontarse a mayo del 68 para desgranar un rosario como el actual de huelgas y manifestaciones. La prensa española, salvo muy contadas excepciones, ha simplificado el proceso, presentándolo en términos puramente dialécticos, de enfrentamiento izquierda-derecha, como un levantamiento social contra la injusticia de una política de rigor anunciada o amagada por el gobierno.

Efectivamente, la chispa estalló cuando el primer ministro Alain Juppé anunció en el programa televisivo «7 sur 7», del 19 de noviembre del año pasado una «gran y definitiva reforma de la Seguridad Social». Inmediatamente se empezaron a conocer lo que, al día de hoy, aún no se sabe bien si eran ideas, planes o proyectos inmediatos del Ejecutivo: supresión de la rebaja del 20 por ciento en la base imponible para las rentas salariales, congelación de las ayudas a los comedores universitarios, recortes presupuestarios drásticos, creación de un impuesto especial de 0,5 por ciento sobre todas las rentas para sanear el tremendo déficit de la Seguridad Social y, lo que probablemente fue el detonante mayor de la crisis: un nuevo intento de racionalizar las empresas públicas, que apuntaba emblemáticamente a la SNCF (Sociedad Nacional de Ferrocarriles), cuyos trabajadores gozan de un estatus privilegiado, a pesar de las gigantescas pérdidas de la empresa. Las calles empezaron a ser un polvorín desde el

momento en que se hizo público que el Gobierno Juppé tenía la intención de elevar a cuarenta años el período de cotización de los **cheminots** equiparándolos al resto de los trabajadores (en la actualidad les basta a los ferroviarios con cotizar 37,5 años para tener derecho a la pensión completa de jubilación). La tensión se incrementó cuando el sindicato CGT difundió un mapa, en el que se marcaban 6.000 kilómetros de líneas deficitarias amenazadas de cierre. Por más que M. Bergougnoux, presidente de la SNCF, salió inmediatamente a la palestra, asegurando que el mapa en cuestión era «pura fábula», el fantasma de unos miles de despidos, en un país que ya tiene una masa de paro del 11,5 por ciento, sumó varios miles más de manifestantes.

Pero el episodio francés no es un encadenamiento más de huelgas y manifestaciones, ni un acto más del antagonismo izquierda-derecha. El problema es mucho más complejo y, para comprenderlo, es necesario profundizar en las circunstancias y significados de cada medida y de cada protesta. Creemos que es nuestro deber intentarlo puesto que a pocos se oculta que los acontecimientos franceses constituyen crónica anticipada, y con las mismas secuencias, de lo que puede suceder dentro de poco en España. Los problemas son los mismos, las dificultades para gestionarlos similares y las fuerzas en conflicto homólogas, con el agravante de que en España los problemas se plantearán con mayor urgencia y los protagonistas se fajarán con mayor dramatismo.

1. Los mismos problemas y las mismas causas de impopularidad

EL Gobierno francés anunció simultáneamente dos reformas imprescindibles para evitar la quiebra financiera a corto plazo del Estado de Bienestar: la reforma del sistema de protección social y la reforma del Sector Público. Al hacerlo realizó un acto de coraje y valentía. Es imperiosamente urgente trazar un plan que elimine en unos años el déficit, vertiginosamente creciente de ambas instituciones: la Seguridad Social (la popular Sécu) tiene un agujero de varios billones de pesetas, debe recibir inyecciones

copiosas del presupuesto y es la principal causante del crónico déficit, la bestia negra de la economía gala; la SNCF ha acumulado una gigantesca deuda (unas 100.000 pesetas por cada ciudadano francés) lo que la sitúa desde hace tiempo en quiebra técnica. Estas son las verdaderas y sustantivas razones de las drásticas medidas anunciadas; la presión de la Unión Europea ha jugado un papel secundario.

En España operan las mismas causas y es imprescindible que el gobierno que salga de las urnas, sea del color que sea, acometa reformas semejantes y aún más duras que las que penden sobre los ciudadanos franceses. Nuestro sector público es menos competitivo aún que el francés, nuestro déficit en porcentaje similar, nuestra deuda en porcentajes del PIB mucho mayor. A Francia le presionaba Europa para cumplir una única condición de Maastricht que no cumplía (el déficit); a España nos tiene que presionar en todos los frentes, porque no cumplimos ninguna. El gobierno Chirac-Juppé se ha mostrado dispuesto a coger el toro por los cuernos, aun a sabiendas de que se jugaba en una semana todo su capital político, tan mayoritariamente reforzado hace poco en las urnas. Ninguno de los ministros de Chirac ha nacido ayer; todos saben perfectamente que sus proyectos no pueden ser llevados a cabo sin tocar la cartera y los «derechos adquiridos», lo que necesariamente da votos a los adversarios y distancia a los afines. Juppé se quiso jugar gallardamente el tipo («no estoy en el gobierno para gestionar el declive de Francia», aunque ello le hubiera ahorrado su propio eclipse).

Al llegar a este punto, no queremos callar nuestra severa crítica a los gobiernos anteriores, españoles y franceses, que, por razones demagógicas, no tomaron las medidas que ellos mismos sabían imprescindibles. Las pensiones no se garantizan con voluntarismos sino con previsión de caja. No se puede gastar toda la harina hoy, si no se siembra lo suficiente para poder hornear mañana.

2. Los mismos «outsiders»

***LOS** sindicatos franceses, tan aguados durante la década de los ochenta, han encontrado un balón*

de oxígeno y han querido patrimonializar todo el descontento social que medidas como las descritas producen. Quizá estén desorientados por la globalización de la economía y el no previsto volumen de paro estructural, pero la maquinaria sindical es todavía la principal arma de movilización y cualquier medida de envergadura de las que comentamos tiene forzosamente que pagar el peaje sindical. En el caso francés, la maquinaria se ha engrasado y ha funcionado como un engranaje de reloj perfectamente sincronizado para que la ocupación de la calle fuera constante: el 21 de noviembre se manifestaban los estudiantes; el 24, los funcionarios; el 25 las mujeres; el 28, de nuevo los funcionarios; el 30 otra vez los estudiantes; en varias ocasiones, con implacable cadencia calculada, los ferroviarios y otros grupos sociales.

LOS staffs sindicales saben muy bien que se oponen a lo que es imprescindible hacer, pero siguen oponiéndose, aunque con diferentes énfasis: Marc Blondel, secretario general de FO (**Force Ouvrière**, sindicato afín al Partido Socialista) ha tenido lógicamente la posición más dura contra el gobierno. Para Blondel la batalla sindical era también política, una ocasión de acelerar la llegada de su jefe, el socialista Jospin, al Eliseo. Louis Marie Viannet, secretario general de la CGT (**Confédération Générale de Travailleurs**), próxima al Partido Comunista) impulsó la protesta, pero dentro de unos límites en los que el gobierno no pudiera cantar victoria, pero tampoco se allanara el camino a los socialistas. Nicole Notat, secretaria general de la CFDT (**Confédération Française Démocratique de Travailleurs**), ha sido mucho más comprensiva con las tesis del gobierno. Ella suele decir que «no hay que limitar las pérdidas» y que algunas medidas dolorosas son inevitables, porque «aunque las defienda el gobierno, tienen una base terrible de realidad». La posición de Notat ha sido tachada de amarillismo por los otros sindicatos, lo que irrita cordialmente a los afiliados a la CFDT.

El paralelismo de situaciones hace previsible que los «outsiders» españoles actuarán de forma simétricamente

equivalente: si el gobierno que lleve a cabo las reformas es del PP, UGT será el brazo armado del PSOE en una batalla que se presentará como el látigo de la derecha para acabar con el Estado de Bienestar; CC.OO. apoyará la protesta pero sólo hasta el umbral de una nueva consolidación del PSOE. ¿Cuál será la fuerza sindical razonable, que acepte perder su purismo en aras de defender mejor a los trabajadores y al conjunto de los ciudadanos? Algunos asignan este papel a USO, pero el miedo a la crítica atenazará a sus dirigentes y el imprescindible pacto social no será posible. Probablemente las cosas serían diferentes si es un gobierno socialista el que deba operar al enfermo; en este supuesto, contaría con la resignada anuencia de UGT y del sector oficialista de CC.OO., muy próximo también al PSOE y muy potenciado en la sombra del PSOE.

ADEMÁS de los sindicatos, la gran reforma se verá sometida al fuego cruzado de los intereses partidistas, como también ha sucedido en Francia. El partido gobernante la afrontará con timidez y los partidos de la oposición aprovecharán la impopularidad de las medidas para soplar sobre el castillete tambaleante de cartas que será entonces el gobierno. El mismo Lionel Jospin despeja todas las dudas cuando descalifica a uno de sus delfines, M. Evin, por haberse mostrado «demasiado comprensivo» en un debate público. Una vez más, el que se mueve no sale en la foto. Los intereses partidistas priman sobre los nacionales y lo que debería ser objeto de consenso se convierte en un garfio para arrancar jirones de piel al adversario.